

**ASUNTO:** RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N.º 001-073364

**DESTINATARIO:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Con fecha 28 de octubre de 2022 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Sanidad solicitud de acceso de acceso a la información pública, al amparo de la *Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno* (en adelante, LTAIBG), presentada por [REDACTED], que quedó registrada con el número 001-073364.

En la misma fecha, dicha solicitud fue trasladada a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como órgano competente para resolver, fecha a partir de la cual comienza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la *Ley 19/2013, de 9 de diciembre*, para su resolución.

En su escrito, [REDACTED] solicita la siguiente información sobre Vacunas Covid Caducadas:

“Hola,

*Solicito mediante el portal de transparencia el número de vacunas covid caducadas desde que se comenzaron a administrarse en España hasta la fecha y el número exacto de vacunas que han devuelto cada comunidad por caducidad o fecha próxima a su caducidad.*

*De igual forma, querría conocer cuántas se han devuelto por compañía (cuántas de Aztrazeneca, cuántas de Pfizer, cuántas de Moderna y cuántas de Janssen).*

*Por último, también conocer a cuánto asciende el gasto de esas vacunas caducas. Gracias.”*

Una vez analizada la solicitud, la Dirección de esta Agencia resuelve **conceder parcialmente** el acceso a la información solicitada que es competencia de esta Agencia y en consecuencia informa que en cuanto a sus dos primeras consultas indicarle que se le adjunta Informe sobre las vacunas caducadas y devueltas a fecha 14 de noviembre de 2022.

En lo que se refiere al coste total de las vacunas caducadas, la denegación parcial que se realiza en esta resolución viene motivada por la aplicación de los límites de acceso a la información al amparo de las causas previstas en el artículo 14.1 j) y k) de LTAIBG, a saber: la limitación del derecho de acceso a la información cuando ello pueda afectar a al secreto profesional y a la confidencialidad en los procesos de toma de decisión.

Y es que el coste de adquisición de las vacunas exige reserva por está sujeto al deber de confidencialidad, al ser parte de los Acuerdos de Adquisición Anticipada concluidos por la Comisión Europea con los fabricantes de vacunas. De acuerdo con las directrices de negociación establecidas en el Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 2020 (BOE núm. 211, de 05/08/2020), la Comisión Europea estableció un comité rector, que la asiste en la toma de decisiones sobre los Acuerdos de Adquisición que deben concluirse. El artículo 10 de las Reglas de Procedimiento del comité rector (“*Rules of procedure of the Steering Board under the joint EU approach to COVID-19 vaccines procurement*”), señala expresamente que los documentos presentados a los miembros del comité rector deberán ser tratados como confidenciales, y que los miembros del comité rector y su secretaría deben suscribir estrictas declaraciones de confidencialidad y mantener las obligaciones de confidencialidad establecidas en dicho artículo.

La propia Comisión lo pone de manifiesto en su web ([https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-eu/coronavirus-response/safe-COVID-19-vaccines-europeans/questions-andanswers-COVID-19-vaccination-eu\\_es#negotiations](https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-eu/coronavirus-response/safe-COVID-19-vaccines-europeans/questions-andanswers-COVID-19-vaccination-eu_es#negotiations)) cuando en el apartado relativo a negociaciones sobre vacunas en el ordinal 5 indica que “Los contratos están protegidos por motivos de confidencialidad, lo cual está justificado por el carácter altamente competitivo de este mercado mundial. Con ello se pretende proteger las negociaciones sensibles y la información comercial, como la información financiera y los planes de desarrollo y producción. La divulgación de información comercial sensible también socavaría el proceso de licitación y podría tener consecuencias de gran alcance en la capacidad de la Comisión para llevar a cabo las tareas que se le atribuyen en los instrumentos jurídicos que constituyen la base de las negociaciones. Todas las empresas exigen que dicha información comercial sensible siga siendo confidencial entre las partes que firman el contrato (...)”. A la vista de ello, la divulgación de los costes por parte del Estado español supondría una quiebra de dicha confidencialidad, por lo que ha de considerarse justificada la aplicación de los límites del artículo 14.1 LTAIBG invocados.

Por otra parte, debe tenerse presente que la Comisión Europea no es un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG, según se desprende de su artículo 2 tal y como este Consejo ya tuvo ocasión de señalar en la Resolución 160/2021 del CTBG, por lo que no cabe remitir la solicitud a efectos de su examen y decisión sobre este punto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente (*Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas*, y *Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa*), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

**DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS**

  
 **agencia española de  
medicamentos y  
productos sanitarios**

**Mª Jesús Lamas Díaz**

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 12/12/2022

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

CSV: 